

Santiago, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, por sentencia de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, en los antecedentes RUC 2.300.421.894-9, RIT 64-2024, condenó a Patricio Enrique Daine González, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa a beneficio fiscal de dos unidades tributarias mensuales, y a la accesoria legal, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, cometido en dicha ciudad el día 1 de agosto de 2023. Asimismo, fue condenado a la pena de multa a beneficio fiscal de un tercio de unidad tributaria mensual, como autor del delito consumado de porte injustificado de arma cortopunzante en espacios públicos urbanos, sorprendido en la misma fecha y lugar. También condenó a Ingrid Margarita Moya Pizarro, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa a beneficio fiscal de dos unidades tributarias mensuales, y a la accesoria legal, como autora del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, cometido en la misma fecha y lugar. Se dispuso el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad impuestas.

En contra de dicho fallo, la defensa de Moya Pizarro recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de veintitrés de julio pasado, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

**Considerando:**

**Primero:** Que el recurso se funda en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. Esta causal guarda relación



con la infracción a las garantías fundamentales desplegada durante el procedimiento seguido contra Moya Pizarro, toda vez que la orden de investigar librada por el señor Fiscal de esta causa se encontraba caducada y, por tanto, la detención viciada se realizó en virtud dicho antecedente.

Expone que se vulneraron gravemente las garantías fundamentales de la acusada, en particular su derecho a un debido proceso legal y su derecho a libertad personal y la seguridad individual. Las infracciones a estos derechos se materializaron debido a que la orden de investigar caducada generó una situación de indefensión en su contra, la cual, por no haberse respetado la exigencia que supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, en relación con al artículo 5° de la Ley 19.880, somete a la encartada a una privación de libertad desde el momento de su detención, hasta el momento de su audiencia de control de detención, sin verificarse una hipótesis de flagrancia o una orden de detención en su contra, limitando así su derecho a un debido proceso y su derecho a la libertad.

La afectación denunciada se verifica desde el acto viciado inicial ya referido, reiterándose posteriormente al aceptarse como medio de prueba la que se gestó en dicho procedimiento, durante la audiencia de preparación de juicio oral, traspasando en esta ocasión los límites impuestos por los artículos 181 y 276 inciso 3° del código adjetivo, en vinculación a la garantía constitucional del debido proceso.

Por último, afirma que se vulneraron las garantías de la encausada en la audiencia de juicio oral, en la cual el tribunal oral valoró positivamente la prueba obtenida vulnerando las garantías fundamentales de la acusada, por lo



que pide se invalide la sentencia y el juicio oral, y se ordene un nuevo juicio oral en que excluya la prueba de cargo que precisa.

**Segundo:** Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo noveno, tuvo por acreditado que, *“...el día 01 de agosto de 2023, aproximadamente a las 15:45 horas, en la intersección de calle Maipú con calle Colón, Arica; se acerca a los acusados Patricio Enrique Daine González e Ingrid Margarita Moya Pizarro una persona de sexo femenino no identificada, quien vestía completamente de negro, entregándole al acusado Daine González una cantidad indeterminada de dinero, recibiendo a cambio y de parte del acusado una cantidad indeterminada de envoltorios, acción que fue observada por la acusada Moya Pizarro, quien efectuaba labores de cobertura y de vigilancia, acusada que en dicho rol miró hacia las cámaras de televigilancia y al advertir que la transacción fue observada por las cámaras, ambos acusados abandonan el lugar.*

*Posteriormente el mismo día, aproximadamente las 16:58 horas, en calle Maipú, Arica, personal de Carabineros OS-7, divisa que la acusada Moya Pizarro realiza un movimiento de manos atribuible a la venta de drogas con un transeúnte no identificado, logrando apreciar que el transeúnte le entrega \$2.000 a la acusada Moya Pizarro, quien a cambio le entrega una cantidad indeterminada de envoltorios característicos a los contenedores de drogas, indicios ante los cuales, aproximadamente las 17:09 horas, se procedió a efectuar un control de identidad investigativo a ambos acusados, incautándosele al acusado Daine González, 46 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de 11 gramos 700 miligramos brutos, 4 gramos 500 miligramos netos, de cocaína base; y una corta pluma de color gris, con la*



*leyenda Náutika, arma corto punzante para cuyo porte no dio justificación razonable, en tanto que a Ingrid Margarita Moya Pizarro, se le incautan 2 billetes de \$1.000 pesos cada uno, dinero producto de la venta de drogas.*

*La droga incautada no estaba destinada al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo de los acusados ni a un tratamiento médico”.*

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos, respecto de ambos acusados, del delito establecido en el artículo 4° de la ley 20.000; además, en el caso del acusado Daine González, el delito contemplado en el artículo 288 bis del Código Penal.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el mismo fundamento decimotercero del fallo impugnado estableció que, “...la Defensa de Ingrid Moya, por su parte, sostuvo primeramente una petición principal de absolución basada en la valoración negativa de la prueba de cargo que solicita, debido a que las acciones que culminaron con la detención de su defendida estaban basadas en una orden de investigar vencida, presentando como prueba documental la Orden de investigar SACFI RUC 2300421894-9, Of N° SACFI – 178-2023 en Arica a 24 de abril de 2023. Esta petición debe ser rechazada, según el análisis previamente realizado, en tanto se tuvo por acreditado que las detenciones de ambos acusados se debieron a la situación de flagrancia en que fueron encontrados, siendo la orden aludida sólo un antecedente de contexto presentado por la policía en su informe, todo ello según lo ya latamente explicado en el considerando décimo. Seguidamente, sostuvo una petición subsidiaria de absolución por falta de participación, alegando que su representada nunca realiza una transacción de drogas. Ello debe ser desestimado según lo expuesto en el considerando ya aludido, en cuanto se tuvo por acreditada su participación atendida la dinámica de los primeros



*hechos acaecidos, en que los testigos, y especialmente las filmaciones y fotografías exhibidas, dan cuenta de una actividad realizada concertadamente entre ambos acusados, en que una consumidora se dirige primeramente a la acusada Moya, negocia, y luego obtiene la droga de parte de Daine, observándose claramente además que posterior a ello la acusada mira hacia las cámaras y al percatarse de que están siendo vigilados, le cuenta a su coautor lo anterior y se retiran inmediatamente del lugar. Por otra parte, es observada realizando una segunda transacción de droga a escasa distancia del testigo González, encontrándose en su poder con posterioridad el dinero recibido a cambio de la droga entregada, con lo que queda claramente acreditada su participación, según lo expuesto tanto en el considerando décimo como en éste, en el ilícito del artículo 4° de la ley 20.000”.*

**Tercero:** Que, en lo concerniente a la infracción denunciada cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, esta Corte ha señalado que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se



respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**Cuarto:** Que, en otro orden de consideraciones, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso y la intimidad, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema debe ser excluido del mismo.

**Quinto:** Que, en relación con las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa.

**Sexto:** Que, como esta Corte ha señalado en ocasiones anteriores, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación.

Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (entre otras, SCS N°s 28.126-2018, de 13 de diciembre de 2018; 13.881-2019, de 25 de julio de 2019; y, 2.895-2020, de 4 de marzo de 2020).



Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales, permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera, (letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis que contempla el artículo 130 del



Código adjetivo —que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia— así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

El artículo 129 del Código Procesal Penal, por su parte, regula la detención en caso de flagrancia, disponiendo específicamente que los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito, acto en el que podrán proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 del mismo código; facultándola, además, para ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien debiere detener, para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 215. En cuanto a la situación de flagrancia el artículo 130 letra a) considera como tal: “a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito”.

**Séptimo:** Que, de la normativa reseñada, es dable inferir que la regla general de la intervención policial estriba en que ésta se lleva a cabo bajo las órdenes o instrucciones del Ministerio Público, y, como excepción, su desempeño autónomo en la ejecución de pesquisas y detenciones en precisos y determinados acontecimientos enumerados claramente por el legislador, que incluso ha fijado un deslinde temporal para su vertiente más gravosa (las detenciones), con el objeto de eliminar o reducir al máximo la discrecionalidad en el actuar policial susceptible de derivar restricción de derechos.





Dicha preceptiva procura conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos a través de dicha subordinación de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación, al organismo encargado por ley de la referida tarea, los que a su vez se desenvuelven conforme a un estatuto no menos regulado —y sujeto a control jurisdiccional— en lo concerniente a las medidas que comprometen los derechos constitucionalmente protegidos de los habitantes.

**Octavo:** Que, a fin de dirimir lo planteado en el recurso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. En efecto, lo contrario implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente de la lectura de los testimonios “extractados” en la sentencia, podría dar por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esas deposiciones, no obstante que estos últimos apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas; lo que de aceptarse, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, y todavía más, en uno que —a diferencia del a quo— dirime los hechos en base a meras actas o registros —eso es sino



el resumen de las deposiciones que hace el tribunal oral en su fallo—, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados

**Noveno:** Que, tal como asentaron los sentenciadores del fondo en la motivación decimotercera —transcrita *ut supra*— los funcionarios policiales actuaron motivados por la dinámica advertida, primigeniamente ante las cámaras de vigilancia y, posteriormente, *in situ* por los funcionarios aprehensores, en la cual se apreció una transacción de drogas. La circunstancia de haber existido una orden de investigar, cuya caducidad se invoca por la defensa como circunstancia fundante del yerro atribuido al fallo impugnada carece relevancia, siendo tan sólo un elemento de contexto pero que en modo alguno sirvió de antecedente para proceder al control de la acusada y su posterior detención, situación que sólo obedece a los indicios de la comisión de un delito advertido por los funcionarios policiales.

**Décimo:** Que, en suma, la actividad policial objetada, al contrario de lo afirmado en el recurso, ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, por lo que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, de modo tal que no pueden aceptarse los fundamentos esgrimidos en el libelo para la afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de Ingrid Margarita Moya Pizarro, en contra de la sentencia de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por



el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.300.421.894-9, RIT 64-2024, los que, por consiguiente, **no son nulos**.

**Se previene que el Ministro Sr. Llanos concurre al rechazo del recurso**, pero tiene presente que si bien ninguno de los dos hechos que habría realizado la encausada constituye aisladamente un indicio suficiente para un control de identidad en los términos del artículo 85 del Código Procesal Penal —haber estado presente en el momento en que el coimputado recibía dinero de un tercero a cambio de ciertos envoltorios, y que momentos después, en un intercambio de manos con un tercero, la propia imputada ejecutó un acto similar—, en el contexto y circunstancias en que tales acciones se desarrollan, en su conjunto constituyen un indicio que satisface los presupuestos de la norma antes indicada. Con todo, la actuación policial puede ser considerada, además, como detención en situación de flagrancia, atendida la apreciación de los hechos por parte de los aprehensores conforme a lo dispuesto en el artículo 130, letra f) del compendio adjetivo citado. En virtud de todo lo anteriormente dicho, en el caso de autos no se advierte ilegalidad en la detención y registro de los encartados, no existiendo en consecuencia vulneración de los derechos constitucionales que se invocan en la impugnación interpuesta por la defensa.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y, de la prevención, su autor.

**Nº 19.247-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Jean Pierre



Matus A., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman los Ministros Sres. Llanos y Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y con licencia médica, respectivamente.



En Santiago, a doce de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

